

MAGREB: LA ENDEBLE Y VULNERABLE MURALLA DE EUROPA

Un informe realizado por Javier Martín.

Este es un proyecto de NOVACT y Devreporter. Con el apoyo de ODHE, Shock Monitor y Ayuntamiento de Barcelona



MAGREB: LA ENDEBLE Y VULNERABLE MURALLA DE EUROPA

1 – Introducción

La región del Magreb, compuesta por Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, ha devenido en la última década en una de las fronteras geopolíticas más inestables de la Unión Europea. Un amplio espacio habitado por unos 95 millones de personas –el ochenta por ciento de ellas en Argelia y Marruecos–, enclaustrado entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, y que separa el sur de Europa del Sahel, una de las zonas más conflictivas del planeta, con la que comparte un amplio abanico de problemas estructurales: desde la pobreza a la corrupción, pasando por el paro, las desigualdades económicas y sociales, la brecha tecnológica, el subdesarrollo educativo y de infraestructuras, la inseguridad alimenticia y el estrés hídrico, que será uno de los mayores del mundo en 2040.

A ello se añaden elementos de seguridad que le convierten en uno de los principales focos de inestabilidad mundial para las próximas dos décadas: el crecimiento demográfico, especialmente preocupante en un país con un excesivo grado de incertidumbre política, económica y de seguridad como es Argelia; el afianzamiento de los movimientos yihadistas, de forma particular en Libia,

pero también en el sur de Túnez y en la propia Argelia, escenario en la última década del pasado siglo de una guerra inconclusa entre el Estado y los grupos radicales de ideología wahabí que dejó más de 300.000 muertos, miles de desaparecidos y numerosas cuentas pendientes en una memoria colectiva aún muy viva; y la proliferación de milicias armadas y de mafias transnacionales, conectadas incluso con grupos afines en el sur de Europa, que se dedican a todo tipo de contrabando, desde armas a personas y alimentos, pero sobre todo de combustible, y que han convertido el comercio ilícito y la economía paralela en fuente de riqueza y trabajo para millones de ciudadanos Túnez, Marruecos, Argelia y Libia.

A la rampante criminalidad y a la amenaza constante del terrorismo se suma la fragilidad política en una región proclive a la corriente neocesarista que recorre todo el mundo árabe a causa del forzado fracaso de las denominadas “primaveras árabes”. En enero de 2011, decenas de miles de tunecinos –mayoritariamente jóvenes– salieron a la calle al grito “libertad, derechos, y justicia social”. Un movimiento de protesta que en apenas dos semanas acabó con la agotada dictadura del enfermo Zinedin el Abedin Ben Alí –abandonado por una parte importante de su régimen– y que enseguida se contagió al resto de naciones de la región MENA por diferentes razones. En algunas de ellas, como Egipto, fruto del mismo desencanto y de la misma debilidad del sistema. En otros, como Libia, impulsado por una agenda exterior.

Casi una época después, aquel movimiento libertario solo sobrevive en Túnez, escenario de una transición democrática tan ejemplar como endeble, sostenida en pilares muy precarios y plagada de claroscuros. La reforma política –que concluyó con las elecciones municipales de 2018– se considera exitosa. Sin embargo, ninguna de las tres demandas que articularon la revolución se ha

cumplido: las libertades logradas tras la revuelta están en franco retroceso; el estado de derecho ha progresado, pero está lejos aún de los estándares de los países más desarrollados en este ámbito. Y la justicia social es todavía un anhelo sin visos próximos de cumplirse: obsoleta, dependiente de las ayudas exteriores y sostenida por las potencias europeas, la economía tunecina adolece de los mismos problemas estructurales que en tiempos de la dictadura –el paro, la corrupción, los errores de gestión gubernamental y la falta de horizontes–, y está sumida en una aguda crisis, similar a la que desencadenó la algarada.

Avanzado el primer trimestre de 2019, la inquietud y amenazas que planeaban sobre Túnez desde que en 2015 una cadena de atentados yihadistas segara la vida de 72 personas –60 de ellas visitantes extranjeros– y hundiera el turismo, uno de los pilares de su frágil economía, se han agudizado. Acosado por los acreedores y la falta de liquidez, que ponía incluso en peligro el pago de salarios a la Administración, el gobierno liderado entonces por el primer ministro Yusef Chahed, aceptó un crédito por valor de unos 2.800 millones de dólares concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a cambio de una serie de transformaciones estructurales y políticas de austeridad. En el pliego de condiciones, ambas organizaciones exigían aligerar el volumen mastodónico de la Administración tunecina, cambios en la política fiscal, apertura de mercados, estabilidad monetaria, lucha eficiente contra la corrupción y otras medidas que incluían recortes. Requisitos que el Gobierno tunecino no se atrevió a implantar –temeroso de la conflictividad social– y que obligaron al FMI y al Banco Mundial a cerrar el grifo del crédito prometido. Acorralado, Túnez recurrió entonces al dinero árabe, prestado en aparentes mejores condiciones. Saudí a través de los lazos establecidos con la Familia real Al Saud por el fallecido presidente Beji Caïd

Essebsi, y catari por las relaciones entre la monarquía en Doha y el movimiento islamista Ennahda, primera fuerza política en el país. Aún así, iniciada la tercera década del siglo XXI, la economía –que se mantiene en los mismos parámetros previos a la revolución– es aún un eslabón demasiado frágil que amenaza la estabilidad de una transición política que ha sido exitosa. También lo hacen –en menor medida– los avances sociales, impulsados y aplaudidos durante la revolución, y hoy en día en franco retroceso.

Una de las clave es del éxito de esa transición política es la transformación ideológica y estructural realizada por el movimiento islamista “Ennahda”, principal fuerza en un país que presume de alto grado de laicidad. Atrapado en la disyuntiva que sacude a todos los grupos emanados de la “Nahda” –el movimiento de resurgir islámico del siglo XIX– y de su principal representante, los Hermanos Musulmanes, obligados a elegir y mantener el equilibrio entre las corrientes que tiran hacia el salafismo radical y aquellas que optan por el pragmatismo, el movimiento fundado en Túnez por Rachid Ghannouchi y Abdel Fatah Mouro eligió la segunda. En mayo de 2015, tras dos años de violencia en que las fuerzas más retrógradas del grupo estuvieron a punto de hacer estallar la transición, separó la predicación de la acción política y devino en un partido conservador de tendencia islamista al uso de la derecha en Europa. No abandonó la agenda islamista, simplemente eligió defenderla e imponerla desde un contexto más moderno, adaptado a la nueva realidad que vivía la sociedad tunecina. Aunque ha perdido el empuje de los más radicales, que se han derivado hacia otros partidos, la apuesta le ha concedido resultados positivos. En 2014 se convirtió en la segunda fuerza del Parlamento –que presidió el propio Mouro– y en el pilar fundamental del gobierno liderado por la plataforma laica “Nidaa Tounis”. Tres años después, ganó las elecciones municipales –las primeras en democracia del país– y

2019 las legislativas, acumulando más poder pese a perder la presidencia de la República y fracasar a la hora de formar y liderar el nuevo gobierno.

Diez años después de la rebelión que derrocó la dictadura de Muamar al Gadafi, Libia es, todavía un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil en la que dos gobiernos –ambos sin legitimidad democrática– lucha por el control del territorio y los recursos económicos secundados por decenas de milicias locales y compañías privadas de Seguridad militar (PSMC) extranjeras que se lucran en la primera guerra privatizada de la historia. Uno, sostenido por la ONU en Trípoli, y otro tutelado por el mariscal Jalifa Hafter, un antiguo opositor en el exilio entrenado por la CIA, quien desde Tobruk domina cerca del ochenta por ciento del territorio y la explotación de la mayoría de los recursos petroleros. Trípoli cuenta, además, con el apoyo político, económico y militar de Qatar y por extensión de Italia y Turquía, país este último principal defensor de la ciudad-estado de Misrata, con la que mantiene lazos comerciales y étnicos desde los tiempos del imperio Otomano. Hafter, por su parte, recibe el mismo apoyo de Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que le proporcionan armamento y superioridad aérea pese al embargo de armas que pesa sobre el país desde la rebelión en 2011. Igualmente de Francia, que le dio altura política, y de Rusia a través de PSMC como Wagner Group, propiedad de Yeugnei Prigozhin, oligarca ruso estrechamente vinculado al presidente Vladimir Putin. Convertido en el verdadero hombre fuerte del país, el mariscal levantó en abril de 2019 un cerco a Trípoli con dos objetivos claros: arrinconar a Misrata, su enemigo más enconado; y arrebatarse al gobierno sostenido por la ONU su último centro de poder y resistencia: el control de la Compañía Nacional de Petróleo (NOC). De esta división, de la anarquía y una guerra convertida en un pulso multinacional sacan provecho diversas milicias y mafias, que

han convertido Libia en el núcleo del gran hipermercado del contrabando que articula el norte de África, desde las tierras del Sahel a las aguas del Mediterráneo; y en el bastión de grupos yihadistas heterogéneos, tanto arraigados históricamente en el propio Sahel como llegados de Oriente Medio, que han convertido el país en uno de sus principales centros de negocios y operaciones.

La solidez de la monarquía evitó que Mohamad VI de Marruecos corriera una suerte similar a la de Ben Ali o Muamar al Gadafi, aunque la situación económica y social compartiera rasgos con la tunecina. En Argelia, fueron una serie de medidas populistas, combinadas con la represión del régimen, las que compraron la paz social y adormecieron el malestar, que estalló de nuevo en febrero de 2019. Similar situación vivió Mauritania, donde las protestas fueron rápidas y duramente aplacadas por el general Mohamed Ould Abdel Aziz, en el poder desde el triunfo del alzamiento militar en 2008.

El fracaso de las “primaveras árabes”, especialmente en Libia, ha tenido dos consecuencias directas para Europa. Una de las más visibles, el incremento de la inmigración de irregular en el Mediterráneo. Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), alrededor de un millón de personas han cruzado el Mediterráneo y llegado a Europa desde que comenzaron sus registros en 2014 y cerca de 20.000 más han muerto oficialmente en el intento, la mayoría a causa del naufragio de embarcaciones precarias salidas desde el norte de África. Miles de ellas más perecieron en los años precedentes, posteriores a la caída de Muamar al Gadafi. En 2019 un total de 110.669 personas lograron llegar de forma irregular a las playas de España, Italia y Grecia desde Marruecos, Argelia, Túnez y Libia y 1.283 desaparecieron en el mar. La mayor parte de ellas procedentes de países del África Subsahariana, pero también de las propias naciones de embarque final.

Decenas de miles más están detenidos en centros de acogida a lo largo de la costa norteafricana y millares más en tránsito o en poder de las mafias en las naciones del Sahel y del Magreb a la espera de poder intentar el salto suicida a Europa. Un número indeterminado, que se calcula en miles, han perdido la vida en el Mediterráneo o en los desiertos del Sahel sin que haya quedado rastro.

La falta de control de las fronteras, tanto en la costa como en las regiones del sur, en especial las que lindan con Mali, Niger, Chad y Sudán, Burkina Faso, Mauritania y Senegal facilita también el movimiento libre en la región de yihadistas y su periplo tanto a Europa como a Egipto o Turquía, lugar de paso hacia Siria e Irak. De acuerdo con el último informe de la fundación de estudios y servicios de Inteligencia "The Soufan Group", Túnez es el cuarto país del mundo en número de combatientes extranjeros que se ha sumado al Estado Islámico en Siria e Irak, por detrás de Rusia, Arabia Saudí y Jordania. El ministerio tunecino de Interior asegura que cerca de un millar de ellos han regresado a territorio nacional en los últimos dos años. Muchos de ellos han hallado refugio en Libia, nación transformada en uno de los bastiones del yihadismo mundial. Se tiene constancia de que en su territorio actúan grupos regionales como Ansar al Sharia, la Organización de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) y Jama'a al Nusrat al Islam wal Muslimin, una nueva plataforma que aúna a antiguos grupos del Sahel. También se ha producido un regreso de combatientes islámicos a Argelia, escenario de un sostenido repunte de la actividad radical armada. El retorno y la presencia activa de yihadistas también es fluida y preocupa a Marruecos y Mauritania.

Otra de las consecuencias más visibles y preocupantes es la consolidación de la economía informal vinculada al contrabando, que en países como Libia, el sur de Túnez, se ha convertido en el núcleo

de su sistema económico. De acuerdo con una investigación del centro de estudios "Crisis Group", el tráfico ilegal de inmigrantes genera cerca de 1.500 millones de euros al año en Libia. El de combustible, más de 2.000 millones de euros anuales. Ambos son, junto al de armas y al alistamiento en una milicia, la principal actividad económica en la mayoría de las poblaciones y la única salida laboral para los jóvenes libios. En 2017, el Consejo Atlántico presentó un informe, dirigido por el investigador Ian Ralby y titulado Downstream Oil Thief en el que se aseguraba que "el robo de productos refinados, como la gasolina y el diesel, supone una amenaza significativa para la economía global y para la estabilidad de los estados y las regiones en el que es esencial", y advertía de que se trata de una actividad cada vez más sofisticada "en la que la frontera entre lo legal y lo ilegal se está diluyendo". Ese mismo año, la Fiscalía de Catania emprendió una investigación para esclarecer los vínculos entre contrabandistas de combustible libios, empresarios malteses y la mafia Santa Elena Ercolano, que introducía la gasolina en Europa.

En el Sahel, esta economía corsaria es también la base laboral de las zonas rurales, la mayor parte de las cuales se han despegado del control del gobierno central. En especial en las provincias del norte de Chad, Camerún, Níger, Mali y Burkina Faso, y el sur de Libia y Argelia, donde se han creado múltiples hetarquías, un novedoso concepto que alude a territorios gestionados por señores de la guerra, capos del contrabando o líderes yihadistas, sostenidos en la economía informal, donde la autoridad del Estado prácticamente se ha volatizado.

2— Evolución

A corto y medio plazo (2030)

La evolución del Magreb estará vinculada a la que sufra el Sahel, región con la que le unen cada vez más vínculos económicos y de seguridad. Y apunta a una cronificación y aumento de los desafíos actuales. La apuesta de la Unión Europea por la militarización en Sahel por encima del desarrollo económico y social de aquellos países hace prever que la presión demográfica, la inmigración regular e irregular, el afianzamiento del terrorismo y la dependencia del comercio ilegal prosigan y se amplíen a lo largo de la próxima década, en especial en las áreas rurales y de desierto que lindan con los estados del norte de África. Una tormenta perfecta que sin duda repercutirá de forma negativa sobre las expuestas poblaciones del Magreb, donde persisten los problemas sociales, políticos y económicos que desencadenaron las primaveras árabes; y en consecuencia también para la Unión Europea, que verá multiplicadas sus amenazas actuales. Especialmente voluble y peligrosa es la situación en Argelia, que podría convertirse en un polvorín de graves repercusiones para toda Europa y en especial para España, país que depende del gas argelino. Controlado por el Ejército, la legitimidad política está en el aire desde que el 22 de febrero de 2019 varios miles de personas salieran a la calle para oponerse al anuncio del círculo que protegía al presidente Abdelaziz Bouteflika de que este optaría a un quinto mandato pese a estar enfermo y tener disminuidas sus facultades desde que en 2013 sufriera un agudo derrame cerebral. La protesta, permitida por el Ejército en un país en el que hasta entonces cualquier reunión callejera por pequeña que fuese era reprimida, destapó definitivamente la lucha por los clanes en el seno del poder y concluyó con un golpe de Estado incruento disfrazado de movimiento popular de protesta. A finales de marzo de ese año, y al regreso del

mandatario de su enésimo viaje por razones médicas a Europa, el entonces jefe del Ejército, general Ahmed Gaïd Salah, se sumó a lo manifestantes y pidió aplicar el artículo de la Constitución que permitía la inhabilitación. El llamado “clan Bouteflika” cedió. El jefatura del Estado Interina pasó al presidente del Senado, Abdelkader Bensalah –nombrado en 2004 por el propio presidente al igual que Gaïd Salah– y el general se convirtió en el hombre fuerte del país. Desde su nueva posición, lanzó una pretendida campaña de “manos limpias” contra la corrupción que en verdad devino en una caza de brujas que condujo a la cárcel a decenas de oficiales de alto rango, políticos, empresarios y periodistas considerados miembros del “clan Bouteflika”. Entre ellos, su hermano Said, al que se consideraba el verdadero poder en la sombra, y el general Mohamad Mediène, alias “Tawfik”, que durante los últimos 25 años fue jefe de los influyentes servicios de Inteligencia argelinos (DRS) y uno de los hombres más poderosos del país. Ambos fueron condenados meses después a más de una decena de años de cárcel junto a la secretaria general del opositor Partido de los Trabajadores, Louise Hanoun, acusados de conspirar con una potencia extranjera, expresión que en Argelia siempre alude a Francia. Igualmente fueron condenados a más de diez años de cárcel los dos ex primeros ministros de Bouteflika, Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal. Otro ex jefe del Gobierno, Abdelamejid Tebboun, un hombre del sistema que dirigió el Ejecutivo de forma breve en el verano de 2017, se alzó con presidencia Tebboun ganó las controvertidas elecciones celebradas en diciembre de 2019 después de que Bensalah y Gaïd Salah retorciesen la Constitución para adecuarla a la pretensión del nuevo clan en el poder. La participación fue la más baja de la historia contemporánea de Argelia y Tebboun fue elegido entre las protestas del movimiento ciudadano “Hirak”, nacido para acabar con el mandato de Bouteflika y que más de un año después sigue en la calle vigoroso cada martes y cada jueves, ahora para

exigir el fin del régimen militar que domina Argelia desde la independencia de Francia en 1962. El 21 de febrero de 2020 las calles de todo el país se volvieron a desbordar para anunciar que la protesta seguiría pese a la creciente represión. Y exigir la salida de Tebboun y del gobierno, a los que consideran parte "de la misma mafia" que se enriqueció y esquilmo el país bajo Bouteflika.

Dos debilidades más siembran dudas sobre la estabilidad futura de Argelia, un país con más de 40 millones de ciudadanos, la mayor parte de ellos jóvenes que buscan labrarse un futuro y que como el resto de los habitantes de la región, miran hacia Europa como vía de escape y progreso ante la escasez de oportunidades. Una, la económica. Argelia está sumida en una grave crisis económica desde 2014, fruto del abrupto desplome de los precios del gas y el petróleo, única riqueza que explota un país absolutamente dependiente del volátil mercado de los hidrocarburos y de las energías fósiles. La venta de petróleo y gas supone el 96 por ciento de las exportaciones de la nación norteafricana, asida a un sistema económico de tinte socialista, en el que el Estado es el primer empleador y la totalidad los productos básicos, desde la harina a la gasolina, están subvencionados. En un intento por mantener la paz social y evitar una revuelta como la acabó con las dictaduras de sus vecinos del este, el régimen argelino ha gastado entre 2015 y 2017 la mitad de sus reservas nacionales de divisas, calculadas entonces en unos 178.000 millones de euros, con el objeto de conservar este sistema paternalista en la equivocada creencia de que la crisis petrolera sería pasajera. Una política que ha comenzado a revertir en 2017 con la suspensión de parte de los subsidios, decisión que desatado la inflación, agudizado depreciación de la moneda nacional y espoleado el malestar social, ascendente desde 2011.

Pese a la reforma energética diseñada por el régimen y su apuesta por el desarrollo de energías alternativas como la solar, la perspectiva es que Argelia, un país sin apenas tejido industrial, siga dependiendo la próxima década del mercado de petróleo y los hidrocarburos. Y de la ayuda de sus dos principales socios: China, cuyas empresas disfrutan de los mayores contratos de infraestructura del país, como la construcción del nuevo aeropuerto de Argel o el nuevo y multimillonario puerto de aguas profundas en el extrarradio de la capital. Y de Rusia, nación a la que le une un importante comercio de armas. La falta de inversión y de industrialización mantendrá durante los próximos diez años al régimen argelino en los primeros puestos de la lista de estados con mayor índice de importación del mundo. Sin apenas oportunidades de trabajo, la economía sumergida -que se calcula mueve un 40 por ciento del PIB- y la inmigración seguirán siendo las principales opciones de futuro para los jóvenes. En 2017, se duplicó el número de argelinos que decidieron aventurarse al mar para alcanzar de forma irregular las costas de Cerdeña y España. Menos de 200 kilómetros separan la ciudad de Orán, una de las capitales económicas de Argelia, de la española Almería. El deterioro de la economía, golpeada por la imposibilidad de mantener el antiguo sistema de subsidios y la imparable consolidación de la economía de mercado en un entramado socialista, abocan al país a una crisis social más profunda, sin que pueda descartarse la violencia. Ni un aluvión de inmigrantes irregulares como el que tiene lugar en Libia.

La segunda debilidad es la seguridad interior y las fronteras. En el último lustro, el yihadismo internacional y el terrorismo interno de raíz islámica radical han crecido de forma lenta pero sostenida, sobre todo en el norte del país. Según la revista "Al Yeish", órgano de propaganda del ministerio de Defensa argelino, en 2017 unidades militares de la lucha antiterrorista mataron a 91 supuestos yihadistas y

arrestaron a cerca de 70, casi todos en las provincias periféricas de Argel. Muchos de ellos estaban bajo el radar del Ejército y en su ficha figuraba que se habían sumado a los movimientos islamistas radicales en la década de los noventa y principios de siglo XXI. Además, se registraron al menos dos graves atentados en el norte del país, asumidos por una facción local vinculada a la organización transnacional "Estado Islámico". Y aunque en las regiones del sur no se han repetido acciones terroristas de gran envergadura como el sangriento asalto al yacimiento de In Amenas (2013), en la frontera este, la situación se mantiene inestable por la imposibilidad material de las autoridades argelinas de vigilar la frontera más larga del norte de África. A igual que en las regiones del Sahel, el régimen de Argel controla la seguridad en las grandes zonas urbanas, pero tiene una presencia menor y descendente -tanto militar como política y social- en las áreas rurales, especialmente las fronterizas, que están siendo ocupadas poco a poco por grupos yihadistas y mafias dedicadas a todo tipo de contrabando. Varios incidentes demostraron el progresivo tránsito de combatientes radicales islámicos en la frontera con Níger y Mali, pero también de Túnez, donde existe una estrecha colaboración con los grupos locales tunecinos encastillados desde 2011 en las montañas de Kasserine. También se prevé que crezca y se afiance el comercio ilegal de armas, personas y combustible a través de las fronteras con Mauritania, Mali, Níger y Libia, corazón del contrabando en el Sahel. En 2016, el ahora primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, admitió que el comercio ilegal de gasolina le cuesta a Argelia más de 2.000 millones de euros al año, solo a través de la frontera con Marruecos. Parte de la gasolina, subvencionada por el gobierno de Argel, entra en el negocio del contrabando a través de la frontera con Libia, donde contribuye a financiar la actividad de los grupos yihadistas y de las mafias dedicadas al matute de alimentos y al tráfico ilegal de inmigrantes. La falta de

colaboración de Argelia, que promueve su propia política de seguridad en la región y se ha desligado de iniciativas militares, como la Operación francesa Barhane, y políticas -como el G-5, impulsadas por los países del Sahel y la Unión Europea-, añaden un factor más de inseguridad y hacen prever que la frontera sur de Argelia seguirá siendo uno de los principales peligros y puntos de preocupación para el Magreb y la Unión Europea la próxima década.

Una situación similar vive el sur de Libia, zona habitada por tribus nómadas desde tiempos ancestrales con vínculos de sangre a lo largo de todo el Sahel, Chad y Sudán. Al oeste del conocido como "paso del Salvador" -que conduce a Níger- se extienden las tribus tuareg, que siempre mantuvieron una endeble alianza con Al Gadafi. A la caída del dictador, una parte de las milicias tuareg huyeron a Malí, donde se sumaron al Movimiento Nacional para la Independencia del Azawad (MNLA). Algunas de ellas se mantienen aún en el seno del grupo yihadista transnacional Jama'a al Nusrat al Islam wal Muslimin mientras que otras han desarrollado su propio camino en el oasis libio de Sebha, donde han dado luz a una corriente neogadafista. Controlan el comercio ilegal a través de la ciudad de Ghat, en la frontera con Argelia, y sostienen una relación endeble con el gobierno sostenido por la ONU en Trípoli. A este del paso de El Salvador, el control del territorio es para las tribus Tebu, que Al Gadafi utilizó como mercenarios en la guerra de Chad y a las que luego traicionó. Los Tebu mantiene estrechas relaciones con grupos opositores en Darfur (Sudán), algunos arraigados ya en territorio libio, y con clanes en Chad, donde la actividad de los nigerianos de Boko Haram es permanente desde hace años. Los Tebu participan del comercio clandestino de combustible y alimentos, pero también con las mafias de tráfico ilegal de inmigrantes procedentes de Sudán y el cuerno de África, que deben atravesar su territorio. También deben

cruzar sus tierras los yihadistas procedentes de Niger y Nigeria, principalmente de Boko Haram, cuya presencia está probada en el sur de Libia y en ciudades del norte como Sirte y Derna.

La inestabilidad política en Libia hace prever que esta situación se prolongará y eventualmente se deteriorará a lo largo de la próxima década, cronificando e incluso aumentando el problema de la inmigración irregular a Europa, ya que el control de las playas del norte del país –ahora en poder de mafias aliadas con Europa, y principalmente con Italia– supone un quebradizo parche que no saja la raíz del problema. Sin una solución política firme a la vista, el vacío de poder que caracteriza las áreas fronterizas entre el sur del Magreb y el norte del Sahel perdurará, dejando espacio libre al desarrollo de las mafias y los grupos yihadistas. Tanto en Libia como en Túnez, Argelia, Chad, Niger y Mali, los gobiernos centrales controlan las áreas urbanas pero no del todo las rurales. El Ejército nigerino nunca pasa de la ciudad de Dirkou, y las fuerzas del general Jalifa Haftar, hombre fuerte del este y parte del sur libio no se desplazan más allá del oasis de Sebha, lo que deja un amplio espacio de territorio sin control. Igual ocurre entre Gao y la frontera argelina y el norte de Burkina Faso, en la ruta hacia Mauritania y Marruecos.

Túnez, por su parte, tenderá a mantenerse estable la próxima década, siempre y cuando se respete el proceso democrático en marcha. La tendencia apunta a que a lo largo de la próxima década ganará poder e influencia en partido islamista “Ennahda”, que llevará a cabo una islamización pragmática y silenciosa de la sociedad tunecina a través, sobre todo, de los sistemas de educación y de asistencia social. La sociedad tunecina se hará más conservadora pero seguirá siendo la más avanzada de la región. La fragilidad económica deberá seguir siendo compensada por la Unión Europea, como hasta la fecha, para que el pequeño país no

descarrile. Los desafíos de seguridad y la economía paralela se mantendrán constantes mientras siga la inestabilidad en Libia. Una eventual revuelta en Argelia es la mayor amenaza, como en el resto de la región.

En Marruecos, el principal factor de inestabilidad es la salud del rey, Mohamad VI. Una eventual muerte prematura del monarca, en un contexto en el que le príncipe heredero es aun demasiado joven, y en el que los partidos islamistas crecen, podría suponer un golpe muy duro para un país que comparte problemas sociales y económicos con sus vecinos, y una amplia frontera con el Sahel y Argelia, los dos mayores factores de desestabilización en el norte de África. La evolución conflicto con el Sáhara Occidentales es otro de los factores de preocupación, del que también participa Argelia, principal apoyo de los saharauis en la región. Los obstáculos al progreso del diálogo, colocados principalmente por Rabat –pero también por Argel–, conllevan el riesgo de un deterioro abrupto de la situación y la resurrección del conflicto armado. Tras cuarenta años de exilio, los campos de refugiados de Tinduf son un polvorín en el que crece el malestar y el deseo de muchos jóvenes de retomar las armas, cansados de esperar una solución política dialogada que no se llega. A ellos se suma la dureza de las condiciones de vida en el desierto y las desigualdades económicas, y el reciente cambio en la dirección del Frente Polisario. Tras la muerte del presidente Mohamad Abdelaziz, la llegada al poder de Brahim Ghali, un hombre de perfil más militar y radical, añade un factor bélico más. Mauritania y Argelia se verían igualmente salpicados por un eventual enfrentamiento armado.

También tendrán un impacto negativo las hetarquías, que sobreviven pese a la apuesta militarista de europea. Ya sea a través del despliegue de sus propios soldados –como la fracasada “Operación Barhane”, liderada por Francia; o la base

aérea de drones levantada por Estados Unidos junto al aeropuerto de Agadez, en Níger. Ya sea a través de la financiación y la venta de armas a los Ejércitos locales en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo global. En este sentido Europa se enfrentará en los próximos años a un problema de seguridad ciclópeo en el Sahel, su temible e inquietante frontera sur. Inspirados en el ejemplo de cuerpos como la Danish Home Guard, engendrada en el seno del movimiento de resistencia a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, algunos expertos han sugerido optar por transformar las milicias y grupos paramilitares en unidades de seguridad y combate que no respondan a la autoridad de los gobiernos, sino a la voluntad y a la legitimidad del pueblo representado en el Parlamento. Un experimento que resultó exitoso tanto en EE UU, tras el conflicto fratricida, como en el Reino Unido, superada la paranoia nazi, pero que se ha revelado dañina en Estados con estructuras de poder e instituciones precarias. La propuesta presentada por la ONU en 2012 tendiente a crear un "Ejército Territorial Libio" no solo supuso un naufragio más, sino que ahondó la entonces incipiente confrontación tribal y contribuyó a acentuar la barbulla que hoy define el país. Empoderadas y fuertemente armadas, sin una jerarquía definida, estas supuestas "áreas de seguridad plural" se transformaron con celeridad en un conjunto de pequeñas hietarquías autónomas donde la presencia del Estado resultaba marginal y su autoridad se evaporaba. Sobre todo en las áreas más alejadas de la capital y en las regiones limítrofes. Y es que mientras las puertas en Europa refuerzan su blindaje, las fronteras líquidas diseñadas por el colonialismo en Oriente Medio y África se esfuman por efecto de la guerra, la ambición capitalista, la injerencia exterior, el contrabando, la migración, el crecimiento demográfico, la pobreza y la crisis climática, factores todos ellos que facilitan el afianzamiento de estos nuevos entes. La primera en

comenzar a desdibujarse fue la línea que separa Irak de Siria víctima de un pulso étnico, político, económico y religioso con aroma a Guerra Fría entre las cuatro potencias regionales y sus respectivos socios internacionales: Turquía, Israel, Arabia Saudí e Irán, con Catar como magnate inversionista. La segunda se difumina en la amplia franja de arena y dunas que separa el verdor agreste del Atlas de la sabana africana.

Basta observar el mapa para intuir la vasta superficie de la dispar hietarquía que comienza a trazarse en el Sahel. En la mayor parte de las zonas rurales del norte de Burkina Faso, Malí, Níger y Chad la presencia del gobierno y del Ejército nacional no es ya ni siquiera simbólica. Una prolongada extensión de arena clave en las tradicionales rutas comerciales transaharianas ahora dominada por milicias armadas de todo jaez: principalmente, grupos radicales takfiries de inspiración wahabí-saudí vinculados al yihadismo global. Pero también bandas y tribus dedicadas al matute con todo tipo de productos: armas y combustible, sobre todo, pero también drogas, alimentos y personas, en un hipermercado del contrabando que se extiende miles de kilómetros y reemplaza a unos sistemas económicos estatales inexistentes. La gasolina subvencionada que se refina en el norte de Libia se vende de estraperlo en Túnez, Argelia, Níger, Malí, incluso Mauritania y Senegal. Mientras que el combustible que consumen los ciudadanos libios cinco veces más caro se produce en Argelia o la misma Nigeria.

Similares circuitos recorren las armas y los migrantes, convertidos en un trágico y millonario negocio más. Sin planes de desarrollo realistas —la ayuda en origen que proponen como alternativa los políticos europeos colisiona con la ausencia de contrapartes fiables en países donde la fragilidad del Estado la compensan y la aprovechan las milicias—, con unas predicciones demográficas que

apuntan a que la población saheliana se duplicará y alcanzará los 600 millones de habitantes en 2040 —cerca del 50% de ellos menores de 30 años— y una aguda crisis climática que en dos décadas convertirá la región en la más seca del planeta, la hetarquía que se consolida en la nueva frontera sur de Europa se perfila como una bomba de relojería. Hasta la fecha la UE, liderada en esta zona por Francia, ha apostado por una política de seguridad y militarización sostenida en el despliegue limitado de tropas y en la captación de posibles socios entre las milicias, que ya se ha demostrado fracasada y arriesgada en otras ocasiones. Y por la conversión de los Estados del norte de África en gendarmes bien remunerados para que ejerzan de parapeto y frenen una migración irregular que en estas circunstancias no dejará de multiplicarse en los próximos años. Un flujo que no están capacitados para absorber y que transformará el núcleo de sus frágiles sociedades, con el consiguiente riesgo de balcanización e inestabilidad no solo de estos países, sino también de toda la cuenca del Mediterráneo.

A largo plazo (2040)

A largo plazo, el mayor peligro es el grado de estrés hídrico que soportara la región, que se prevé uno de los más grandes a nivel mundial, según el World Resources Institute. El agua y la tierra serán escasos, y alimentar a la población norteafricana y ofrecerle un futuro será un desafío, pese a que el crecimiento demográfico se desacelerará. A ello se sumarán los problemas ya citados, especialmente el de la presión migratoria desde el Sahel y la inseguridad en esta zona, que sin embargo, se verá menos afectada por la falta de agua. A este respecto, cabe la posibilidad de que los flujos migratorios a Europa cambien de tendencia, ya que todo apunta a que el crecimiento negativo de la población europea y las dificultades económicas que se vislumbran en el viejo continente hará que el peso de la UE y de los países que la componen se vea

reducido. Europa se verá abocada a buscar mano de obra en los países vecinos, especialmente en el Magreb, que verán igualmente reducido su desarrollo.

3– Influencia sobre la seguridad regional y europea

La inestabilidad de las frontera entre el sur del Magreb y el Sahel, el afianzamiento de los grupos yihadistas, la debilidad de los gobiernos magrebíes y la extensión de las redes de contrabando de personas, armas y combustible, que han establecido vínculos ya con organizaciones hermanas en el sur de España, Francia e Italia, suponen ya un reto para la seguridad regional y europea, y lo seguirán siendo en los próximos veinte años. Hasta la fecha, las potencias europeas han optado por políticas orientadas principalmente hacia la seguridad para contrarrestar esta situación, incrementado su presencia militar en la zona y las operaciones de lucha antiterrorista. Sin embargo, existen escasos visos de solución si no se admite que la pobreza, el subdesarrollo, el abandono de las zonas rurales, la inmigración a las ciudades y el crecimiento rápido y voluminoso de una población sin acceso a la educación y al trabajo son la raíz del problema, y que está no se puede erradicar solo con el estruendo de las armas. La seguridad de Europa seguirá comprometida en el Magreb a menos que se apueste por políticas constructivas, de apoyo a gobiernos legítimos, de desarrollo educativo y de respeto absoluto a los derechos humanos. Se destierren las viejas estrategias de cohabitación con regímenes autoritarios, que se toleran a cambio únicamente de que mantengan la seguridad, y se acepte el papel político que adquieran los movimientos islamistas no violentos, evitando etiquetarlos o encuadrarlos en otra categoría por intereses políticos, económicos y militares expurios. El Magreb seguirá siendo en las próximas dos décadas una de las fronteras geopolíticas más inestables de Europa y para revertir esta tendencia se debe apostar por alentar la buena gobernanza y

el desarrollo sostenible. Por promover sociedades de pleno derecho, con instituciones robustas y una sociedad civil activa y poderosa. Y un desarrollo económico firme y democrático, que alcance a todas las capas de la sociedad, amaine los aires revolucionarios que aún soplan en el Magreb, contribuya a aminorar la seducción que producen la inmigración y los movimientos radicales, y reduzca los espacios en los que se mueven las distintas mafias.

© Javier Martín – Febrero 2020